

[internacional]

Aprender SIN MIEDO

La III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, celebrada en Palma de Mallorca, reúne a representantes de más de 90 países y a los responsables de las principales organizaciones humanitarias



Pepe Díaz

Se alertó sobre la especial indefensión de las niñas y se aconsejó combinar la Agenda Paz y Mujeres con las Escuelas Seguras.

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SAFE SCHOOLS

Palma de Mallorca, SPAIN
27 - 29 May 2019



THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SAFE SCHOOLS

Palma de Mallorca, SPAIN
27 - 29 May 2019

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SAFE SCHOOLS

Palma de Mallorca, SPAIN
27 - 29 May 2019

La reina Letizia, junto a un grupo de niños participantes, durante el acto de clausura de la conferencia.

LA comunidad internacional quiere impedir o, al menos, mitigar, una dramática realidad que ha llevado a que 21.000 niñas y niños y sus profesores hayan sido atacados en el último lustro. Hay lugares como Afganistán, Malí, Nigeria o Siria donde el mero hecho de ir al colegio supone arriesgarse a morir y el derecho a aprender sin miedo es una quimera. Conseguir protegerlos es complejo, pero los mecanismos de acción humanitaria siguen avanzando. Durante la III Conferencia sobre Escuelas Seguras, organizada por España en colaboración con Argentina, Noruega y la Coalición Global para Proteger a la Educación de los Ataques (GCPEA) y celebrada en Palma de Mallorca los días 28 y 29 de mayo, el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, anunció que España liderará la capacitación de personal civil y militar de aquellos países que forman parte de la Declaración sobre Escuelas Seguras.

Además, tres países (Guatemala, Nicaragua y Gambia) han anunciado su intención de endosar esta Declaración y asumir las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados, con lo que son ya 90 los Estados implicados para que profesores y estudiantes dejen de ser objetivos militares. La reina Doña Letizia, que

clausuró la conferencia, resumió la razón de ser del encuentro: «Que todos los niños y niñas puedan ir tranquilos a la escuela, que esta escuela exista, que esté dotada con medios y, sobre todo, con maestros, debe ser una premisa irrenunciable para toda la sociedad, para las instituciones, para todos».

Consciente de la necesidad de alzar la voz, aunar esfuerzos y afrontar los retos con un enfoque práctico y operativo entre todos los implicados en la defensa de la educación, el Gobierno español ha organizado el encuentro de Palma de Mallorca, como parte de su firme compromiso con la sensibilidad humanitaria a través de los ministerios y organismos implicados en su acción exterior. Concebida como un instrumento político para sentar unas bases y establecer una estrategia común, la Conferencia ha conseguido reunir a más de 300 personas entre ministros, gestores políticos y militares de casi

España pondrá en marcha un programa de formación sobre Escuelas Seguras

un centenar de países (incluidos algunos con sistemas educativos afectados por conflictos o inseguridad) y los máximos responsables de las más importantes organizaciones internacionales implicadas en la protección de la infancia, la igualdad de género y la infancia. Entre otras autoridades, estuvieron presentes la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles; la presidenta en funciones de las Islas Baleares, Francina Armengol; la Alta Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach; el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez; el director general de las Naciones Unidas y Derechos Humanos, Marcos Gómez Martínez; la directora general de Política de Defensa, Elena Gómez Castro o las directoras ejecutivas de UNICEF, Henrietta H. Fore, y *Save The Children*, Helle Thorning-Schmidt. «Tenemos que ser capaces de encontrar unos valores comunes, porque incluso en la guerra hay reglas que respetar», afirmó durante la inauguración Josep Borrell.

NIÑOS Y NIÑAS SEGURAS

En las conclusiones y compromisos finales, y además de la importante adhesión de Guatemala, Nicaragua y Gambia a la Declaración sobre Escuelas Seguras, se han producido avances significativos como el hecho de constatar la relación existente entre las Escuelas

Seguras con la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, la Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También la necesidad de generar sinergias entre estas distintas agendas para poder avanzar. Asimismo, las Agendas de Niños y Conflictos y de la Educación en Emergencia se han situado en lo más alto de la política internacional y reclamado que se conviertan en prioridad para todos los Estados. Noruega anunció la creación de una Red de Puntos Focales para fortalecer y facilitar la cooperación en esta materia.

La iniciativa presentada por España consiste en la puesta en marcha de un programa de cooperación y formación para personal civil y militar con responsabilidad en materia de defensa con el objetivo de prevenir ataques a escuelas y universidades en conflictos armados. Se centrará en la aplicación de las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante los Conflictos y su integración en los marcos normativos y operativos. Otros países también mostraron su intención de diseñar planes nacionales similares.

El programa, que se desarrollará en colaboración con el Ministerio de Defensa y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), consistirá en una pasantía de alrededor de una semana en Madrid para funcionarios de aquellos Estados que hayan suscrito la Declaración de Escuelas Seguras y padezcan una guerra o una situación de amenaza terrorista. En la selección tendrán prioridad aquellos incluidos en el marco de acción de cooperación española. Según el plan previsto, la iniciativa incluirá a 15 países y, probablemente, lo integrarán dos representantes de cada uno de ellos, uno militar y otro civil.

Las sesiones de trabajo se focalizaron en tres asuntos específicos: por un



El SEGENPOL, almirante Martínez Núñez, insistió en la necesidad de conseguir escuelas y talleres seguros.

lado, identificar el impacto en los niños y niñas de los ataques a la educación y del uso de infraestructuras docentes para fines militares. Al mismo tiempo, establecer, desde una perspectiva de género, las medidas que aborden las necesidades específicas de las niñas.

En segundo lugar, analizar el papel preventivo de monitorear, reportar y establecer mecanismos de atribución

En los últimos cinco años se han producido 12.700 agresiones a colegios

de responsabilidad a quienes lleven a cabo ataques contra estudiantes, profesores y escuelas. Y se el tercero de los paneles —en el que se desarrollaron ejercicios prácticos—, abordaron las medidas que permitan implementar las Directrices para proteger la educación de ataques.

En este último panel, el secretario general de Política de Defensa afirmó que «los pacificadores internacionales tenemos a veces la idea bienintencionada de que podemos —por nosotros mismos— llevar la paz a cualquier lugar del mundo, y eso es un error. La paz resulta imposible si no llega desde dentro, si no se alcanza una solución diseñada por y para la población local, sostenible con recursos locales y aceptable por las partes».

El almirante Martínez Núñez incidió en que, por desgracia, en los países en guerra la presencia militar suele ser para los niños un recordatorio del conflicto por lo que la labor de las fuerzas internacionales debe centrarse en «contribuir a proporcionar un contexto de seguridad amplio, lo que implica acciones múltiples pero menos visibles. Acciones que van desde la vigilancia lejana, hasta la creación de burbujas de seguridad mediante despliegues de fuerzas militares en la periferia y policiales en el interior».

DENUNCIAR Y PROPONER

La Conferencia también analizó el último informe presentado por la Coalición Global para Proteger a la Educación de los Ataques y titulado *Education under Attack 2018* que pone de manifiesto que los ataques indiscriminados y deliberados a las escuelas y universidades, los estudiantes y el personal (tanto en los centros como en el camino hacia ellos) han aumentado de forma considerable en los últimos cinco años. Las cifras son devastadoras: entre 2013 y 2017 se han contabilizado 12.700 agresiones a centros educativos en 70 países. En 28 de ellos, los colegios fueron blanco directo de los ataques y los

niños convertidos en soldados, raptados o víctimas de abusos sexuales. Los peores lugares del mundo para estudiar son Siria, Yemen, Egipto, Nigeria y República Democrática del Congo. Les siguen de cerca Afganistán (que ha perdido en los últimos años 2.000 centros educativos); Malí, país en el que 28.580 menores no pueden ejercer su derecho a la educación, y Ucrania, que ha visto cómo los ataques a las escuelas se han multiplicado por cuatro en 2019. Especial relevancia merece el caso de Nigeria, un lugar en el que la milicia yihadista *Boko Haram* ha secuestrado, violado y matado a cientos de niñas por el mero hecho de ir al colegio y han conseguido imponer su terror hasta erradicar los centros educativos de niñas en el norte del país. En Mosul, el 90 por 100 de los estudiantes tuvieron que dejar las escuelas durante la ocupación del *Daesh*.

Además, en ese mismo periodo, fuerzas y grupos armados utilizaron los edificios docentes con fines militares como base, acuartelamiento, posición de tiro, arsenal o centro de detención en al menos 29 países. Situación que, además de poner en riesgo vital a los niños, convierte al colegio en sinónimo de miedo y lleva a muchos padres a evitar la escolarización cuando hay riesgo de violencia. Ese temor se incrementa considerablemente en muchos países en el caso de las niñas. En este sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su informe de 2017 sobre Mujer, Paz y Seguridad, afirmó que la probabilidad de que una niña que vive en un país de conflicto no esté escolarizada es 2,5 veces mayor que en cualquier otro lugar.

En la Conferencia de Palma se ha intentado poner cara y nombre no solo a los políticos y responsables de las ONG sino también a estos niños y sus profesores, escucharlos y permitir que su voz se alce y produzca, al menos, un estremecimiento entre quienes pueden actuar para evitarlo. Muzoon Almelleh es una adolescente que cuando huyó de Siria dejando toda su vida atrás tan solo quiso llevar consigo su mochila de estudiante y sus libros porque tenía claro cuál era la única manera para seguir viviendo: «No quería dejar de aprender».

Rosa Ruiz



Hélène Gicquel

Un profesor intenta impartir clases en las ruinas de lo que fue un colegio destruido en la Cachemira pakistaní, cerca de la frontera con la India.

Declaración sobre Escuelas Seguras

Los países se comprometen a cumplir unas Directrices que tratan de prevenir los ataques y defender el derecho a la educación

La Declaración sobre Escuelas Seguras no forma parte todavía del derecho internacional consolidado, pero sí representa un claro compromiso político para proteger a los niños y sus profesores. Y, además, sienta las bases para el desarrollo de futuras normativas. Fue elaborada mediante un proceso consultivo encabezado por Noruega y Argentina junto con la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GC-PEA), organismo creado en 2010 por las más importantes organizaciones dedicadas a la infancia y la educación en situaciones de emergencia y en contextos de conflicto. Desde el primer momento se tuvo claro que había que hacer un llamamiento a toda la comunidad internacional y, especialmente, implicar a los países que padecen estas situaciones y terminar con la impunidad para los responsables. Con este propósito, Noruega organizó en mayo de 2015 la I Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras y se invitó a todos los Estados a endosar la Declaración (la segunda se celebró en Argentina en 2017). Al mismo tiempo se redactaron unas Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante los Conflictos Armados, que los Estados asumen al endosar la Declaración y que incluyen desde la recogida de datos sobre ataques o la atención y reparación a las víctimas, hasta el asegurar la continuidad de la educación en zonas de guerra y el diseño de programas educativos sensibles al conflicto. Se decidió celebrar encuentros periódicos —como las Conferencias— para que los Estados compartan experiencias y lecciones aprendidas al tiempo que abordan la implementación de medidas concretas. Además de los 90 países que ya las han aceptado y ha recibido el apoyo de las más altas instancias de la ONU y son parte incuestionable de la Agenda 2030. El desarrollo de las Directrices se facilita en resoluciones como la 1998 (de 2011) que consideró que se pueda llevar a los responsables de ataques contra centros educativos ante la justicia; y las 2143 (de 2014) y 2427 (2018) en las que se piden medidas concretas para proteger a la educación frente a los ataques y allana el camino para la Declaración de Escuelas Seguras.

El gobierno español se sumó desde el principio (mayo de 2015) a la Declaración sobre Escuelas Seguras y sus Directrices y es uno de sus principales valedores. Al mismo tiempo, ha impulsado avances en este campo en las distintas agendas de protección de civiles —Agenda Mujer, Paz y Seguridad y la Agenda de Niños y Conflictos Armados— y promovido resoluciones en el Consejo y la Asamblea de la ONU tan emblemáticas como la 2242 (de 2015), la 2286 (2016) y la 2331, también de 2016.